AMPARO EN REVISIÓN 102/2017
QUEJOSO: *****

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
SECRETARIA: DOLORES RUEDA AGUILAR

En atención a lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia de rubro: **“PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.”**¹, a continuación se hace público el fragmento del proyecto de sentencia del Amparo en Revisión 102/2017, en el cual se realiza el estudio de constitucionalidad respectivo:

1. **Primera Cuestión a resolver: ¿Son constitucionales los artículos 2, fracciones II y III, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 38, 39 y 40 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Federal, en materia del derecho de réplica? ¿Las multas previstas en el artículo 39 del ordenamiento reclamado son excesivas y desproporcionales? ¿Procede analizar la constitucionalidad de los artículos 38 y 40 del ordenamiento reclamado?**

¹ Jurisprudencia P./J. 53/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pleno, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página: 61.

2. **Estudio.** Para analizar los argumentos formulados por la parte quejosa, en primer lugar se debe desarrollar el contenido y alcance del derecho de réplica y el procedimiento establecido en la Ley cuestionada para ejercerlo, luego, a la luz de dicho marco, analizar los conceptos de violación que el quejoso hizo valer en contra de la ley reglamentaria, ya que no fueron objeto de estudio en el juicio de amparo por el sobreseimiento decretado por el Juez.

3. El derecho de réplica encuentra su fundamento en el párrafo primero del artículo 6 constitucional y en diversos tratados internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano. Mediante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, se incluyó el derecho de réplica en el mencionado artículo constitucional, el cual establece:

Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. [El subrayado es propio]

4. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también recoge este derecho en su artículo 14, en relación con los artículos 11 y 13. Asimismo, el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos asegura, en su artículo 19, la libertad de expresión, pero con ciertas restricciones, que son aquellas necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.

5. Como se observa, ni la Constitución ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos² abundan en lo que debe entenderse por derecho de réplica, sino que dejan espacio al legislador ordinario para que, en uso de su libertad de configuración normativa, lo reglamentara de la manera que considerara más conveniente, siempre en estricto apego a las garantías constitucionales e internacionales aplicables. Lo complejo del tema derivó en que la ley reglamentaria fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta el cuatro de noviembre de dos mil quince.
6. En dicha ley, se define el derecho de réplica en los siguientes términos:

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

[...]

II. Derecho de réplica: El derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le

² Sobre el particular debe decirse que la Corte IDH interpretó el artículo 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el sentido de que el ejercicio del derecho de réplica se dará en las condiciones que establezca la ley, cuyo contenido puede variar de un Estado a otro, dentro de ciertos límites razonables, lo cual no impide la exigibilidad de respetar tal derecho y de garantizar su libre y pleno ejercicio. Corte IDH. Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7, párrs 27 y 28.

cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.

[...]

7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte que, el derecho de réplica debe entenderse como complementario de la libertad de expresión. Esto, pues su objetivo es brindar un espacio de participación a quien haya sido aludido, para lograr un equilibrio entre los sujetos y la información difundida, y de este modo garantizar el más pleno ejercicio de la libertad de expresión de ambas partes y el más amplio debate e información en una sociedad democrática. Es decir, no debe entenderse como una limitación a la libertad de expresión, pues de ninguna manera el derecho de réplica puede ejercitarse como una censura previa, sino como un mecanismo que funciona posteriormente a la emisión de información, inexacta o falsa, que el sujeto aludido alega le causó un agravio.
8. Este mecanismo no tiene como objetivo censurar opiniones o reparar agravios en un sentido de compensación económica, sino que al hacer alusión a información inexacta o falsa, debe entenderse como un mecanismo de tutela al equilibrio informativo, que requiere necesariamente que los datos o hechos publicados falten a la verdad o que, por su origen, por su forma de presentación o por su ubicación en los espacios dispuestos en un medio de comunicación, den la apariencia de objetividad cuando en realidad inducen a conclusiones

equivocas o incompletas al haberse presentado de manera selectiva o haberse omitido información relevante.

9. En ese sentido, el derecho de réplica sólo puede ejercerse frente a datos y hechos publicados, y no frente a opiniones, ideas o puntos de vista, aun cuando éstas puedan resultar ofensivas o incluso vejatorias, pues para eso existen otro tipo de medidas –civiles, administrativas y penales– que garantizan la no intromisión en la vida privada, el derecho al honor, entre otros.
10. El derecho de réplica solo se comprende, se explica y responde desde el ejercicio cotidiano de la libertad de expresión y las complejidades que ello conlleva en su interacción con los derechos de las demás personas por lo que, incluso en la Convención Americana de Derechos Humanos,³ se le ha dado dos vertientes: la rectificación y la respuesta. La primera de éstas, consiste en corregir la información falsa o inexacta que se haya presentado; la segunda, en la posibilidad de poner en igualdad de circunstancias en el debate público a quien resulte aludido por información falsa o inexacta.
11. Así, el derecho de réplica no funciona como un mecanismo reparador de agravios, sino, como ya se mencionó, como un mecanismo de tutela al equilibrio informativo o una vía para hacer efectivas las responsabilidades que conlleva la libertad de pensamiento y expresión y que es igualmente necesaria dentro de una sociedad democrática

³ Al respecto, ver, Corte IDH. Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). *Op. Cit.*, párr. 26.

que pretenda nutrirse del diálogo informado y de la veracidad de la opinión pública.

12. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho de referencia es una de las medidas menos restrictivas para remediar un abuso en la libertad de expresión que cause perjuicio a los derechos de las personas⁴ y que la rectificación de información errónea es la forma menos costosa desde el punto de vista de la libertad de expresión para reparar daños vinculados a ella.⁵
13. A la luz de lo anterior, esta Primera Sala sostiene que el derecho de réplica constituye el mecanismo de equilibrio informativo menos restrictivo y costoso de la información difundida a través del ejercicio de la libertad de expresión.
14. Ahora bien, en línea de lo anterior es pertinente señalar que la referida ley reglamentaria contempla dos procedimientos, uno no jurisdiccional para ejercer tal derecho frente a los sujetos obligados y, otro que consiste en un procedimiento judicial en esta materia.⁶

⁴ CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 51. 30 diciembre 2009, párr. 80.

⁵ CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2014. Volumen II Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 13. 9 de marzo de 2015, párr. 290.

⁶ Lo anterior es coincidente con la opinión expresada por el Juez Héctor Gros Espiell el cual sostuvo que la determinación sobre si una información tiene el carácter de inexacto o agravante, en términos del artículo 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe ser la consecuencia de un procedimiento judicial que asegure la garantía de todos los derechos en juego, lo cual resulta fundamental ya que “sin un procedimiento judicial capaz de determinar, con plenas garantías, la existencia o no de los extremos exigibles para que el derecho de rectificación o respuesta se reconozca en un caso concreto, si hubiera un conflicto o diferencia sobre su ejercicio, se estaría violando el artículo 8 de la Convención [...]” Corte IDH. Corte IDH. Exigibilidad del

15. El primero de ellos –el no jurisdiccional–, se encuentra regulado en el Capítulo II, denominado “**Del procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados**” el cual abarca de los artículos 9 a 19 de la ley.⁷

derecho de rectificación o respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). *Op. Cit.* Opinión separada del Juez Héctor Gros Espiell. Párr. 3.

⁷ “**Artículo 9.** El procedimiento para ejercer el derecho de réplica deberá iniciarse, en todos los casos, a petición de parte.

Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de representante o apoderado.

Artículo 10. Tratándose de transmisiones en vivo por parte de los prestadores de servicios de radiodifusión o que presten servicios de televisión y audio restringidos, si el formato del programa lo permitiera y a juicio del medio de comunicación es procedente la solicitud presentada por la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica, ésta realizará la rectificación o respuesta pertinente durante la misma transmisión, en la extensión y términos previstos en esta Ley.

Cuando no se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente:

- I. Nombre del peticionario;
- II. Domicilio para recibir notificaciones;
- III. Nombre, día y hora de la emisión o la página de publicación de la información;
- IV. Hechos que desea aclarar;
- V. Firma autógrafa original del promovente o de su representante legal, y
- VI. El texto con las aclaraciones respectivas por el que se rectifica la información replicada.

El escrito deberá ir acompañado de copia de identificación oficial del promovente y, en su caso, del documento que acredite la personalidad jurídica del representante legal o el parentesco del afectado fallecido, o que se encuentre imposibilitado para ejercerlo por sí mismo.

Artículo 11. A partir de la fecha de recepción del escrito en el que se solicita el derecho de réplica, el sujeto obligado tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica.

Artículo 12. El sujeto obligado tendrá hasta tres días hábiles, contados a partir de la fecha en que emitió su resolución, para notificar al promovente su decisión en el domicilio que para tal efecto haya señalado en el escrito presentado.

Artículo 13. El contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques a terceras personas y no podrá exceder del tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir la información falsa o inexacta que genera un agravio, salvo que por acuerdo de las partes o por resolución judicial, dada la naturaleza de la información difundida, se requiera de mayor espacio para realizar la réplica, rectificación o respuesta pertinentes.

Artículo 14. Si la solicitud de réplica se considera procedente, deberá publicarse o transmitirse al día hábil siguiente al de la notificación de la resolución a que hace referencia el artículo 12 de esta Ley, cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o edición, en los demás casos.

Artículo 15. Tratándose de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia.

16. De tales preceptos se advierte, para poder hacer efectivo el derecho de réplica en el procedimiento no jurisdiccional, se debe iniciar forzosamente, a petición de la parte que considere que se ha difundido información respecto de hechos inexactos o falsos que le causen agravio (artículo 9).
17. Dada la naturaleza del ejercicio del derecho de réplica, el legislador contempló dos supuestos para el ejercicio de este derecho, a saber: cuando se relacione con transmisiones en vivo, en cuyo caso se

Artículo 16. Cuando se trate de información transmitida a través de un prestador de servicios de radiodifusión o uno que preste servicios de televisión o audio restringidos, la rectificación o respuesta tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.

Artículo 17. Las agencias de noticias que difundan información falsa o inexacta a sus suscriptores, en agravio de una persona, en los términos previstos en esta Ley, deberán difundir por los mismos medios a sus suscriptores, la rectificación o respuesta que realice la persona legitimada para ello, en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la fecha en que resuelva la procedencia de la solicitud de réplica.

Artículo 18. Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica adquirida o proveniente de las agencias de noticias o de los productores independientes, estarán obligados a difundir la réplica o rectificación respecto de la información falsa o inexacta que éstas les envíen, para lo cual en sus contratos o convenios deberán asentarlos. El medio de comunicación deberá publicar o transmitir la réplica o rectificación al día hábil siguiente al de la notificación de las agencias o productores independientes cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o edición, en los demás casos.

Artículo 19. El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, en los siguientes casos:

- I. Cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado;
- II. Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta Ley;
- III. Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio;
- IV. Cuando sea ofensiva o contraria a las leyes;
- V. Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida, en los términos previstos en esta Ley;
- VI. Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue la misma relevancia que a la que le dio origen;
- VII. Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación, y
- VIII. Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia.

En todos los casos anteriores, el sujeto obligado deberá justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante en términos del artículo 12 de esta Ley, acompañando, en su caso, las pruebas que al efecto resulten pertinentes.”

solicitará y realizará la rectificación o respuesta durante la misma; o bien, respecto de todos aquellos casos en que no se actualice el supuesto anterior, ocasión en la que se contará con un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información, para solicitar el ejercicio del derecho de réplica a través de un escrito firmado y presentado ante los prestadores de servicios de radiodifusión, televisión o audio restringido en el cual se señalen los datos generales de la persona peticionaria y la información necesaria para identificar el nombre, día y hora de la emisión, los hechos que se desean aclarar y el texto propuesto para tal propósito (artículo 10).

18. Una vez realizado lo anterior, el sujeto obligado⁸ tiene un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica (artículo 11) y hasta tres días hábiles para notificar a la persona promovente, en su domicilio señalado para tal efecto, sobre su decisión o no de publicar lo solicitado (artículo 12).
19. Cuando una solicitud de réplica se considere pertinente, la misma deberá publicarse o transmitirse al día hábil siguiente al de la notificación de la anterior determinación cuando se trate de programas o publicaciones diarias y en la siguiente transmisión o edición en los demás casos (artículo 14). El contenido de la réplica debe limitarse a la información que la motiva, sin poder comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques a personas y deberá ser

⁸ En términos del artículo 4 de la ley reglamentaria, son sujetos obligados los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original.

similar en características, tiempo, extensión y ubicación –tratándose de medios impresos– y horario– en relación con programas de radiodifusión o televisión–, a la información, falsa o inexacta, que generó un agravio, salvo pacto entre las partes o resolución judicial (artículos 13, 15 y 16).

20. Asimismo, las agencias de noticias que determinen la procedencia de la rectificación o respuesta, deberán de difundirla, por los mismos medios a sus suscriptores, en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la fecha en que se resuelva la procedencia de la misma (artículo 17) y al día hábil siguiente, tratándose de medios de comunicación al de la notificación de las agencias o productores independientes cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o edición en los demás casos (artículo 18).

21. Finalmente, el legislador contempló diversos supuestos (artículo 19) en los cuales los sujetos obligados podrán negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, entre los cuales se incluyen: cuando se trate de transmisiones en vivo y la misma ya se haya realizado; la réplica se ejerza fuera de los plazos y términos previstos en la ley; no se limite a la aclaración de datos o información inexacta o falsa que haya causado agravios; sea ofensiva o contraria a las leyes; la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida; la información haya sido previamente aclarada; verse sobre información oficial emitida de manera verbal o formal por personas servidoras públicas; y, finalmente, cuando la información provenga de una

agencia de noticias y se haya citado a la misma. Situaciones en las cuales el sujeto obligado deberá justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante.

22. Por otra parte, **el procedimiento judicial en materia del derecho de réplica** se encuentra regulado en el Capítulo III denominado **“Del procedimiento judicial en materia de réplica”** el cual se desarrolla en los artículos 20 a 37 de la ley.⁹

⁹ **Artículo 20.** Todo lo concerniente a la aplicación, observancia e interpretación de la presente Ley es competencia exclusiva de las autoridades federales en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 21. Los tribunales de la Federación serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales que se promuevan con motivo del ejercicio del derecho de réplica en los términos que dispone esta Ley.

Será competente por razón de territorio para conocer del procedimiento judicial a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito del lugar que corresponda al domicilio en que resida la parte solicitante, con excepción de lo dispuesto en el Capítulo IV de esta Ley.

En donde no resida un Juez de Distrito y siempre que la información falsa o inexacta cuya rectificación se reclame, haya sido emitida o publicada por sujetos obligados en el mismo lugar o lugar próximo, los Jueces de Primera Instancia dentro de cuya jurisdicción radique dicho sujeto obligado tendrán facultad para recibir la demanda de réplica, debiendo resolverse en la forma y términos que establece este ordenamiento.

Artículo 22. El procedimiento judicial en materia de derecho de réplica se iniciará siempre a petición de parte.

La solicitud de inicio del procedimiento judicial deberá ser presentada por la parte legitimada o por los sujetos referidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 3 de esta Ley.

Artículo 23. El procedimiento judicial en materia de derecho de réplica es independiente del derecho que le asiste a todo sujeto afectado para acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes para reclamar la reparación de los daños o perjuicios que se hubieran ocasionado en su contra con motivo de la publicación de información que se le atribuya.

Artículo 24. La solicitud de inicio del procedimiento judicial deberá presentarse ante el Juez de Distrito competente, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes:

I. A la fecha en que la parte legitimada debió haber recibido la notificación a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, en el caso de que no la hubiere recibido.

II. A la fecha en que la parte legitimada haya recibido la notificación a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, cuando no estuviere de acuerdo con su contenido.

III. A la fecha en que el sujeto obligado debió haber publicado o transmitido la aclaración correspondiente en los términos y condiciones previstos en esta Ley, en el caso de que no la hubiere efectuado.

Artículo 25. En el escrito por el que se solicite el inicio del procedimiento a que se refiere este Capítulo deberán señalarse:

I. Nombre y domicilio de la parte solicitante o de quien promueva en su nombre;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Nombre y domicilio de la parte demandada, teniendo dicho carácter el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias a la que se le atribuya la publicación materia del derecho de réplica;

IV. Descripción de la información, programa o publicación materia del derecho de réplica, para lo cual el solicitante deberá aportar datos suficientes que permitan identificar con precisión la misma;

V. Pretensión que se deduzca en el procedimiento judicial en materia del derecho de réplica;

VI. Relación sucinta de los hechos que fundamenten su petición;

VII. Las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente en los términos previstos por esta Ley; las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado;

VIII. Las consideraciones de derecho que estimare pertinentes y necesarias, en su caso, y

IX. La firma del solicitante.

Si la solicitud fuera presentada por dos o más personas, deberá designarse de entre ellas a un representante común. A falta de señalamiento expreso en el escrito de solicitud respectivo, lo designará oficiosamente el Juez competente.

Artículo 26. A todo escrito de solicitud de inicio del procedimiento, el promovente deberá acompañar los siguientes documentos:

I. Una copia de su escrito de solicitud y anexos para todas las partes en el procedimiento;

II. Las pruebas a que se refiere la fracción VII del artículo anterior;

III. El documento por medio del cual se acredite de manera fehaciente la personalidad del promovente, en su caso, y

IV. El acuse de recibo original de la solicitud de rectificación o respuesta que no se hubiere contestado; el escrito emitido por el sujeto obligado mediante el cual se hubiere denegado la solicitud de réplica; o, en su caso, la copia del programa o publicación efectuada por el sujeto obligado en cumplimiento a una solicitud de derecho de réplica, cuando la parte legitimada considere que es insuficiente o incorrecta.

Artículo 27. En el supuesto de que el actor no posea copia del programa o publicación en la que funde su solicitud, podrá solicitar al medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente que la hubiera difundido, que expida una copia de la misma a su costa. Dicha petición deberá formularse siempre con anticipación a la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento judicial en materia del derecho de réplica. El acuse de recibo correspondiente deberá acompañarse como anexo de la misma.

Artículo 28. En los procedimientos judiciales del derecho de réplica se admitirán toda clase de pruebas, salvo las que sean contrarias a derecho.

Las pruebas se ofrecerán en el escrito de solicitud y en la contestación, y deberán acompañarse a los mismos; las que se presenten con posterioridad no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes.

Artículo 29. Para conocer la verdad sobre los hechos controvertidos en el procedimiento a que se refiere este Capítulo, el Juez podrá valerse en cualquier momento y hasta antes de que dicte sentencia, de todos los medios de prueba que estime necesarios, siempre que estén reconocidos por el Derecho.

Artículo 30. Admitida la solicitud, el Juez mandará emplazar en forma inmediata al sujeto obligado en contra de la cual se hubiera presentado, con copia del escrito inicial y anexos que la conformen, para que dentro del plazo de cuatro días hábiles siguientes al que surta sus efectos el emplazamiento, produzca su contestación por escrito, y haga valer las excepciones y defensas que estime pertinentes.

Artículo 31. En el procedimiento judicial del derecho de réplica no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, en caso de que los hubiere, se resolverán al emitirse la resolución que ponga fin al procedimiento.

Artículo 32. En el escrito en que el sujeto obligado demandado formule su contestación deberá expresarse:

I. Nombre del medio de comunicación, agencia de noticias, productor independiente o cualquier otro emisor de información y, en su caso, de su representante legal;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Contestación a cada uno de los hechos que consigne la solicitud;

IV. Excepciones y defensas;

23. El procedimiento judicial en materia de réplica, es independiente del derecho de reclamar en la vía jurisdiccional los daños o perjuicios causados por alguna publicación (artículo 23), es competencia de los tribunales de la Federación (artículos 20 y 21) y se inicia, igualmente, a petición de parte (artículo 22)
24. La petición para iniciar este procedimiento se debe presentar ante el Juez de Distrito competente en razón de territorio (artículo 21) dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que: **i)** la parte

V. Las consideraciones de Derecho que se estimen necesarias y pertinentes, en su caso;

VI. Las pruebas que estime adecuadas para demostrar los extremos de su defensa, y

VII. Firma de quien presente la contestación.

El sujeto obligado deberá adjuntar a su escrito, los documentos que acrediten su personalidad; las pruebas que estime convenientes para desvirtuar la imputación que se haga en su contra y, en su caso, la copia del programa o la publicación en que se hubiera hecho la divulgación de la información que dio lugar al ejercicio del derecho de réplica y que hubiere sido aportada como prueba por el actor mediante solicitud en los términos señalados en el artículo 27 de esta Ley.

Artículo 33. Cuando el sujeto obligado no pueda exhibir alguna o la totalidad de las pruebas en que funde su defensa o la copia del programa o la publicación a que se refiere el plazo anterior, dentro del plazo que la ley le concede para producir la contestación a la solicitud del derecho de réplica y hubieren causas justificadas para ello, el Juez podrá conceder un plazo adicional de dos días hábiles para su presentación, siempre que anuncie dicha circunstancia en el escrito de contestación.

Artículo 34. Dentro de los dos días hábiles siguientes a que haya sido presentada la contestación de la demanda, o en su caso, concluido el término legal para hacerlo, el juez citará a las partes a audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de la cual podrá dictar sentencia o, en su caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Las resoluciones que emita el juez serán públicas y estarán disponibles para su consulta electrónica, en los términos que disponga la ley de la materia.

Artículo 35. En contra de las resoluciones que el Juez emita de conformidad con la presente Ley, procede el recurso de apelación, en los términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 36. Si la sentencia determinare la procedencia de las pretensiones del demandante, el Juez además de imponer la sanción establecida en los artículos 38 y 39 de esta Ley, ordenará al medio de comunicación, agencia de noticias, productor independiente o cualquier otro emisor de información, la difusión o publicación de la réplica, señalando un plazo que no podrá exceder de tres días hábiles siguientes a partir de la notificación de la sentencia.

En el procedimiento judicial en materia del derecho de réplica procederá la condenación de costas.

Artículo 37. Cuando la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos de esta Ley, siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular, debidamente registrado, el derecho de réplica se ejercerá de conformidad con lo establecido en esta Ley, observando lo establecido en el presente Capítulo. En estos casos, las sentencias que dicten los jueces competentes serán notificadas a la autoridad electoral competente.”

legitimada debió haber recibido la notificación sobre la determinación del sujeto obligado en relación con una solicitud de réplica en el caso de que no la hubiera recibido; **ii)** la parte legitimada haya recibido esa notificación y no estuviere de acuerdo con su contenido; o, **iii)** el sujeto obligado debió haber publicado o transmitido la aclaración correspondiente en caso de que no la hubiera efectuado (artículo 24).

25. El escrito inicial deberá contener los datos generales del solicitante; el señalamiento de un domicilio para oír y recibir notificaciones; nombre y domicilio de la parte demandada; una descripción de la información, programa o publicación materia del derecho de réplica; la pretensión que se deduzca en el procedimiento judicial; una relación sucinta de los hechos; las pruebas que acrediten la existencia de la información difundida, la falsedad o inexactitud de la misma, o las que demuestren el perjuicio ocasionado; las consideraciones de derecho pertinentes; y, por último, la firma del solicitante (artículo 25).
26. En este tipo de procedimiento son admisibles todo tipo de pruebas, salvo las que sean contrarias a derecho (artículo 28) y no se sustancian incidentes de previo y especial pronunciamiento, siendo que si se plantea alguno debe resolverse al emitirse la resolución que ponga fin al procedimiento (artículo 31).
27. Una vez que ha sido admitida la solicitud, el juez debe emplazar al sujeto obligado para que dentro del plazo de cuatro días hábiles siguientes al que surta sus efectos el emplazamiento produzca contestación por escrito, ofrezca pruebas y haga valer las excepciones y defensas pertinentes (artículos 28 y 30).

28. Una vez que se haya producido la contestación, dentro de los dos días hábiles siguientes o concluido el término legal para hacerlo, el juez debe citar a las partes para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de la cual podrá dictar sentencia o, en su caso, deberá hacerlo dentro de las veinticuatro horas siguientes (artículo 33). Las determinaciones de referencia pueden ser combatidas a través del recurso de apelación en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles (artículo 35).
29. En los casos en los que se determine que son procedentes las pretensiones del demandante, el juez además de imponer las multas a las que hacen referencia los artículos 38 y 39 de la ley en la materia,¹⁰ ordenará al sujeto obligado la difusión o publicación de la réplica, señalando un plazo que no podrá exceder de tres días hábiles a partir de la notificación de la sentencia (artículo 36).

¹⁰**Artículo 38.** Se sancionará con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al sujeto obligado que no realice la notificación al particular en términos del artículo 12 de esta Ley.

Artículo 39. Se sancionará con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al sujeto obligado que, sin mediar resolución en sentido negativo, no publique o difunda la réplica solicitada dentro de los plazos establecidos por el artículo 14.

Se sancionará igualmente con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al sujeto obligado que se hubiese negado a la publicación o transmisión de la réplica sin que medie justificación de su decisión conforme al artículo 19 de la presente Ley.

30. Establecido lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resultan **inoperantes e infundados**.
31. Por un lado, resultan inoperantes los argumentos vertidos en los conceptos de violación primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo, pues parten de una premisa falsa, como se demostrará a continuación. Sirve de apoyo, por analogía, a esta determinación la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: **“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.”**¹¹
32. Esta determinación tiene su fundamento en que el argumento total de dichos conceptos de violación es que el vocablo “falsos” tanto en la definición del derecho de réplica, prevista en el artículo 2, fracción II, así como en los diversos 3, 5, 13 y 17 de la ley cuestionada, a decir del quejoso, afecta su constitucionalidad, cuando no es así. En efecto, los argumentos medulares de los mencionados conceptos de violación son en síntesis los siguientes:
- a) En su **primer concepto**, el quejoso sostiene que el uso del vocablo “falsos” obliga al medio de información a tener las pruebas de todos los hechos noticiosos del día y de las acusaciones que se hagan en protestas y mítines. En todo caso,

¹¹ 2a./J. 108/2012 (10a.); Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Pág. 1326.

bastaría con “inexactos”, pues falso compete a las leyes penales y civiles, lo que le impide el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

- b) En su **segundo concepto**, el quejoso argumenta que los artículos combatidos, al utilizar dicho vocablo, violentan su derecho al trabajo, pues como editor, tiene derecho a publicar los hechos noticiosos del día, tal y como se den, más no tiene la facultad ni autoridad de pedirle a quienes son responsables de marchas, mítines e inconformidades que les presenten las pruebas correspondientes, sin las cuales, en su interpretación de la ley, no puede publicarlas.
- c) En su **tercer concepto de violación**, el quejoso sostiene que el artículo 5 de la ley combatida viola su derecho a la libertad de expresión por utilizar “falsos”, pues los periodistas para poder externar su crítica tendrían que conseguir las pruebas de su dicho y ya con ellas emitir su opinión, pues en caso contrario pueden ser acusados de falsedad.
- d) En su **cuarto concepto**, el quejoso sostiene que la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio es inviolable y que cómo podría catalogarse de falsa una idea si no pueden exigirse pruebas de una idea.
- e) En su **sexto concepto de violación**, el quejoso sostiene que los artículos 2, fracción II, 3 y 5 de la ley combatida violan la garantía de seguridad jurídica, pues al facultar a un ciudadano o instituciones para acudir directamente al medio de información acusándolo de falsedad primero debe existir una sentencia de un juzgado civil o penal que así lo señale y ordene la réplica.

f) En su **séptimo concepto de violación**, el quejoso sostiene que los artículos 2, fracción II, 3 y 5 de la ley combatida violan el artículo 16 constitucional pues en caso de publicar una réplica por una acusación de falsedad, es una molestia debido a que los medios de comunicación no trabajan con base en falsedades, sino con hechos noticiosos, opiniones de columnistas en libertad de expresión que pueden ser erróneas o inexactas, pero no falsas.

33. Como se observa, el quejoso parte, al formular sus **siete primeros conceptos de violación**, de la premisa de que el derecho de réplica es aplicable a cualquier información que sea publicada o difundida por un sujeto obligado. Sin embargo, como ya se señaló, el derecho de réplica solamente es aplicable a información que sea susceptible de un juicio de veracidad o que, por su origen, por su forma de presentación o por su ubicación en los espacios dispuestos en un medio de comunicación, den la apariencia de objetividad cuando en realidad inducen a conclusiones equivocadas o incompletas.

34. Es decir, los artículos, opiniones, hechos noticiosos, entre otros, que sean publicados por un medio de información, no necesitan tener, necesariamente para ser publicados, pruebas que los sustenten, cuando la propia naturaleza de la información no lo amerite. Sería deseable, sobre todo en el marco de una sociedad democrática, que la información que se dé a conocer a través de estos medios se apege estrechamente a la veracidad y objetividad que exige una buena labor periodística, pero el derecho de réplica no cumple la función de ser

una censura previa que filtre los hechos u opiniones de los cuales no exista un sustento, sino que es un mecanismo que ayuda a equilibrar la información publicada tanto para la tranquilidad personal de quien se sienta agraviado, como para la sociedad que merece estar debidamente informada.

35. Sin embargo, de esto no se desprende que una opinión o noticia deba estar sustentada en hechos comprobables para ser publicada, esto, en todo caso, es responsabilidad de quien la emita si quiere preservar su credibilidad y prestigio periodístico, pero cuando se publiquen hechos o datos –más nunca opiniones– inexactos o falsos, o que se presenten de una manera que den una interpretación errónea o fuera de contexto, quien se sienta agraviado por dicha información podrá solicitar el derecho de réplica, siempre y cuando éste resulte aplicable
36. Por otro lado, el ejercicio del derecho de réplica en ningún momento representa una censura a lo publicado, simplemente obliga al medio de comunicación a publicar la rectificación o respuesta de la persona agraviada en los mismos términos que la información falsa o inexacta en aras de garantizar, a través de ese mecanismo, un equilibrio en la circulación de información en una sociedad democrática.
37. Cabe resaltar que el derecho de réplica, no constituye una acusación de falsedad o de cualquier índole, pues como se ha visto, solo se limita a la aclaración o rectificación de los hechos o datos publicados que la persona legitimada acredite le causa agravio, por ser falsos o inexactos; tan es así, que la propia ley, en su artículo 10, señala los

requisitos que debe contener la solicitud y en su numeral 13 dispone que en ningún caso podrá contener juicios de valor u opiniones ni usarse para realizar ataques a terceras personas.

38. Como se desprende de lo anterior, el quejoso parte de una premisa falsa pues le da al derecho de réplica que se solicita ante el sujeto obligado (medio de comunicación, agencias de noticias, productores independientes y cualquier otro emisor de información, responsable de la publicación) una naturaleza distinta a la que tiene, por lo que sus argumentos, como se ha demostrado, resultan **inoperantes**.
39. Adicionalmente, en su **quinto concepto de violación**, el quejoso sostiene que los artículos 11, 12 y 14 de la ley combatida que prevén el procedimiento para ejercer el derecho de réplica, violentan la garantía contenida en el diverso 13 constitucional, pues el medio de información privado se convierte en juzgado o tribunal especial al recibir la solicitud de derecho de réplica. Además, el artículo 12 de la ley convierte al sujeto obligado en actuario sin tener en cuenta la capacidad económica de éste. Asimismo, en el **octavo concepto de violación**, establece que dichos artículos violan lo establecido en el artículo 17 constitucional, pues las acusaciones de falsedad en publicaciones le corresponde atenderlas a tribunales judiciales y no a medios de información en juicios privados. Dichos argumentos son **infundados**.
40. Del procedimiento no jurisdiccional antes descrito –que es el combatido por el quejoso – se desprende que una vez realizada la

solicitud de ejercicio del derecho de réplica, el sujeto obligado tendrá que decidir, tomando como parámetro lo establecido en la ley, si considera que procede o no dicha solicitud. A partir de esta determinación, deberá notificar al solicitante dentro de los tres días hábiles siguientes en el domicilio que al efecto haya señalado en la solicitud. En caso de que considere que es procedente, el escrito de réplica, rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente en el medio y en circunstancias semejantes a la información que dio origen a la solicitud.

41. Sin embargo, esta Primera Sala considera que ese procedimiento de ninguna manera violenta el artículo 13 de la Constitución Federal pues los sujetos obligados no se erigen, en ningún sentido, en tribunales, ni mucho menos en uno de naturaleza especial a través del cual se establezca una jurisdicción específica para persona alguna en razón de sus particularidades. En ese sentido, de la interpretación histórica del artículo constitucional de referencia se desprende que la teleología del mismo es consagrar la plena igualdad ante la ley, eliminando las manifestaciones que atentan contra ella, en el caso específico de los tribunales especiales, tal disposición funge como protección para evitar la creación de tribunales distintos a los ordinarios que pudieran ser creados por la ley con competencia genérica y jurisdicción diferente para las personas, en función de ciertas particularidades de las personas.¹²

¹² Al respecto resulta aplicable, en lo pertinente, la tesis P. CXXXV/97, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época, pág. 204 de rubro: **IGUALDAD. LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL LA CONSAGRAN, EN EL ASPECTO**

42. El procedimiento no jurisdiccional contemplado en la ley relativo al derecho de réplica no convierte a los sujetos obligados en tribunales en sentido formal, pues los mismos no pertenecen a la estructura del Estado mexicano, ni en sentido material, pues a través del mecanismo de referencia no se autoriza a los mismos a decidir sobre los derechos de las personas que soliciten ejercer su derecho de réplica.
43. En efecto, tal y como ha sido ampliamente reseñado, el mecanismo no jurisdiccional creado por el legislador constituye únicamente un medio, adoptado en consonancia con las obligaciones generales contempladas en los artículos 1 (respeto y garantía de los derechos humanos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para asegurar el apropiado equilibrio en el ejercicio de dos de los derechos reconocidos en ese mismo instrumento internacional, el derecho a la libertad de expresión, por un lado, y el derecho de réplica por otro.
44. Lo anterior, pues debe recordarse que la libertad de expresión contempla una dimensión social consistente en el reconocimiento de que este derecho es un medio para el intercambio de ideas e información entre las personas, lo cual implica el derecho de conocer opiniones, relatos y noticias, siendo especialmente relevante para una sociedad democrática el asegurar el conocimiento de la información de la que disponen otras personas.¹³

JURISDICCIONAL, PROHIBIENDO LAS LEYES PRIVATIVAS, LOS TRIBUNALES ESPECIALES Y LOS FUEROS.

¹³ Al respecto, ver, entre otros. Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No.

45. En ese sentido, la adopción de un mecanismo no jurisdiccional para preservar el adecuado flujo de información veraz de ninguna manera viola el contenido del artículo 13 de la Constitución Federal y, por el contrario, resulta adecuado, al ser el menos restrictivo y costoso en términos del ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión social.
46. Debe precisarse además, que para resolver si procede o no la publicación de la aclaración, rectificación o respuesta, el sujeto obligado no tiene que tramitar un juicio o procedimiento jurisdiccional, solo debe resolver sin mayor trámite y, notificar al interesado dentro del término establecido por la ley, si su solicitud procede o no, y en su caso deberá publicarla, por lo que de ninguna manera se convierte en juez y parte ni tribunal especial o privado, pues como ya se estableció, en ese procedimiento no se le está acusando de falsedad, pues solo se regula el derecho de la parte que se considera agraviada con la publicación de datos o de información que considere falsa o inexacta que le agravie para que se publique su versión.
47. Adicionalmente, el quejoso pierde de vista que, como también se adelantó, la ley establece la posibilidad de judicializar el derecho aludido. Esto es, si bien existe una etapa previa en la cual participan particulares, finalmente existe también la posibilidad de, en ciertos supuestos, acudir ante un órgano judicial que solvente el

73, Párrafo 66; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, Párrafo 148; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, Párrafo 79; y, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, Párrafo 110

procedimiento respectivo. Es decir, la ley permite que, a través de un mecanismo previo, entre particulares, se busque el equilibrio informativo a través del ejercicio del mencionado derecho de réplica, pero esto no implica que el Estado deje de garantizarlo, pues de no haber acuerdo entre las partes, el sujeto que se considere agraviado podrá acudir a instancia jurisdiccional.

48. Esto es, la solicitud del derecho de réplica que se hace valer ante el sujeto obligado, es distinto del procedimiento judicial en materia de réplica, pues como ya se explicó, el primero se presenta ante el sujeto obligado y se lleva a cabo sin mayor trámite conforme a lo establecido en el Capítulo II de la Ley de Réplica y solo se resuelve si procede o no la publicación de la respuesta aclaración o rectificación solicitada.
49. En cambio, el segundo procedimiento se presenta ante el juez de distrito competente y se tramita el juicio conforme al Capítulo III de la misma ley, en el que en su caso, además de imponer las multas que resulten procedentes, ya sea por no haber notificado su determinación al solicitante y por no haber realizado la publicación respectiva o únicamente esta última dentro del plazo establecido por la ley, ordenará al sujeto obligado la difusión o publicación de la réplica.
50. De ello se concluye que el procedimiento no jurisdiccional señalado como inconstitucional tampoco viola el artículo 17 de la Constitución Política pues, finalmente, serán los órganos jurisdiccionales de la Federación los competentes de conocer las controversias en materia

del derecho de réplica. De ahí lo **infundado** de los conceptos de violación estudiados.

51. Por otra parte, los argumentos relativos a que la publicación de hechos falsos dan lugar a responsabilidades civiles o penales y que en todo caso deben ser determinadas por un juez, son inoperantes toda vez que los procedimientos regulados en la Ley de Réplica –no jurisdiccional y jurisdiccional –explicados con anterioridad son distintos e independientes del derecho que le asiste a todo sujeto afectado para acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes para reclamar la responsabilidad civil o penal y en su caso, para solicitar la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado en su contra con motivo de la publicación de información que se le atribuya, tal y como se advierte de los artículos 23 y 41¹⁴ de la Ley de Réplica que nos ocupa.

52. En su **noveno concepto de violación**, el quejoso argumenta que el artículo 7 de la Ley¹⁵ es contrario al párrafo noveno del artículo 21 constitucional, pues obliga al medio de información a poner a

¹⁴ **Artículo 41.** Las sanciones contenidas en este Capítulo serán aplicadas por el Juez de Distrito con independencia de otras que conforme a las leyes aplicables corresponda aplicar al sujeto obligado infractor y de la responsabilidad civil o penal que resulte.

¹⁵ **Artículo 7.** Los sujetos obligados deberán contar en todo tiempo con un responsable para recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica.

Los sujetos obligados deberán tener permanentemente en su portal electrónico el nombre completo del responsable, domicilio, código postal, entidad federativa, correo electrónico y teléfono.

En los casos en que el sujeto obligado contemple, como parte de su organización interna un defensor de los derechos de los lectores, radioescuchas o televidentes, según sea el caso, y cualquiera que sea la denominación que se otorgue al responsable de esa función, este mismo podrá ser designado como responsable de atender y resolver las solicitudes a que se refiere el presente artículo.

disposición del público domicilio y teléfono, lo cual, sostiene, se entiende que es el privado de la persona responsable, pues no señala que sea el del medio informativo. Este argumento es inoperante.

53. Lo anterior, pues parte de una premisa falsa, toda vez que si bien el artículo establece que los sujetos obligados deberán contar en todo tiempo con un responsable para recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica, claramente señala que: *“Los sujetos obligados deberán tener permanentemente en su portal electrónico el nombre completo del responsable, domicilio, código postal, entidad federativa, correo electrónico y teléfono”*. Por su parte, el artículo 4 de la ley señala: *“Los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, serán sujetos obligados en términos de esta Ley”*.
54. Por lo tanto, es evidente que los datos que la ley obliga a tener a disposición del público, serán además del nombre de la persona responsable, los datos correspondientes al medio de comunicación obligado (domicilio, código postal, entidad federativa, correo electrónico y teléfono), no así los datos privados del responsable para recibir y resolver las solicitudes que se presenten conforme al artículo 7 señalado.
55. **Segunda cuestión: ¿Las multas previstas en el artículo 39 del ordenamiento reclamado son excesivas y desproporcionales?**
56. Atendiendo a la causa de pedir, por así advertirse de la lectura de sus argumentos, se sigue que en el **décimo concepto de violación**, el

quejoso sostiene que las multas previstas en el artículo 39 de la ley reclamada violan el artículo 22 de la Constitución Federal pues son desproporcionales y resultan excesivas en comparación al hecho tutelado que es no publicar un derecho de réplica.

57. Lo anterior, porque a decir del quejoso, las sanciones no se fijan con base en la gravedad de la infracción, ni acorde a la capacidad económica del medio informativo, además de que pone a este último en la disyuntiva de contar con al menos treinta y cinco mil cincuenta pesos para cubrir la multa mínima respectiva.
58. Los planteamientos de referencia son **infundados** en virtud de las siguientes consideraciones:
59. El artículo 22 de la Constitución Federal prohíbe en su primer párrafo imponer las penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.
60. Respecto a la prohibición de imponer como sanción una multa excesiva, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado una amplia línea jurisprudencial, dentro de las cuales destaca la jurisprudencia P./J. 9/95, de rubro: "**MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE**".¹⁶

¹⁶ Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, julio de 1995, página 5 y registro 200347.

61. Conforme a dicho criterio, una multa es excesiva cuando resulta desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito, o cuando se propasa por ir más adelante de lo lícito y lo razonable; además, dicha sanción puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos.
62. Por tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, la ley debe permitir que la autoridad sancionadora determine, en cada caso, su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar, individualizadamente, la multa que corresponda.
63. Al respecto, debe precisarse que si una multa no está prevista en un marco normativo en el que, expresamente, se indiquen los parámetros para su individualización, ello no conlleva, necesariamente, su inconstitucionalidad por excesiva, siempre que esté prevista en términos de una cuantía mínima y una máxima para su imposición.
64. Lo anterior, porque si una norma prevé una multa que oscila entre un mínimo y un máximo, ello impone a la autoridad administrativa la obligación implícita de individualizarla, proporcionalmente, como consecuencia directa del deber de fundamentación y motivación que

todo acto de autoridad debe revestir en términos del artículo 16 de la Constitución Federal.¹⁷

65. Así, la previsión de un mínimo y un máximo como parámetro de cuantificación de las multas, constituye, por sí misma, una técnica legislativa de individualización casuística que posibilita a la autoridad administrativa imponer la sanción respectiva tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste, de ser el caso, en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar la multa individualizada correspondiente.

¹⁷ En ese sentido, resulta ilustrativa la tesis 1a. XLIX/2009, de rubro y texto siguientes: **“LEY ADUANERA. SUS ARTÍCULOS 178, FRACCIONES I Y IV Y 185, FRACCIÓN II, AL ESTABLECER MULTAS QUE PUEDEN OSCILAR ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.** Los mencionados preceptos legales establecen multas relacionadas a infracciones fiscales y administrativas en materia aduanera, sobre la base de una técnica legislativa reconocida por esta Suprema Corte como constitucional: el establecimiento de un mínimo y un máximo, entre los cuales se debe individualizar. El artículo 22 constitucional prohíbe las multas excesivas, siendo una posibilidad de éstas aquellas que son fijas, pues en la realidad producen el mismo resultado que el prohibido por la norma constitucional, esto es, un trato desproporcionado, al imponer una idéntica penalidad, de manera invariable e inflexible, a una serie de casos heterogéneos. Sin embargo, las multas que se deben individualizar entre un mínimo y un máximo no son de aquellas que se reputan como fijas ni constituyen una variante de una multa excesiva. Ello por dos razones: 1) en primer lugar, el solo hecho de que una norma establezca una multa que se fija entre un mínimo y un máximo exige de la autoridad administrativa la implícita obligación de individualizarla proporcionalmente, por derivarse esta obligación directamente de lo prescrito por los artículos 14 y 16 constitucionales, en el sentido de que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados, teniendo como premisa que al objetivo de individualización casuística en busca de la proporcionalidad es al que se instrumentaliza esta técnica legislativa y 2) en segundo lugar, porque en el caso concreto, existe una norma aplicable que obliga a la autoridad a individualizar las multas en materia aduanera tomando en cuenta las circunstancias particulares de realización de las infracciones. Lo anterior, toda vez que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria a la Ley Aduanera, establece que dentro de los límites fijados por dicho código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deben fundar y motivar sus resoluciones, estableciendo a continuación un listado de seis fracciones que contienen criterios individualizadores concretos que deben tomarse en cuenta en la medida en que resulten aplicables. Amparo directo en revisión 1378/2008. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar”. Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, abril de 2009, página 583 y registro 167454.

66. En el caso, el artículo 39 del ordenamiento reclamado establece:

Artículo 39. Se sancionará con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al sujeto obligado que, sin mediar resolución en sentido negativo, no publique o difunda la réplica solicitada dentro de los plazos establecidos por el artículo 14.

Se sancionará igualmente con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al sujeto obligado que se hubiese negado a la publicación o transmisión de la réplica sin que medie justificación de su decisión conforme al artículo 19 de la presente Ley.

67. Tal y como se observa, el precepto reclamado regula dos supuestos de multa, la primera oscila de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México para el sujeto obligado que, sin mediar resolución en sentido negativo, no publique o difunda la réplica solicitada dentro de los plazos establecidos por el artículo 14 del mismo ordenamiento en cuestión.

68. La segunda multa va de los quinientos a los cinco mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México para el sujeto obligado que se hubiese negado a la publicación o transmisión de la réplica sin que medie justificación de su decisión conforme al artículo 19 de la propia normativa reclamada.

69. Las multas de referencia claramente están diseñadas entre parámetros mínimos y máximo que permiten a la autoridad sancionadora individualizarlas en función de la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de

éste, de ser el caso, en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor.

70. En ese sentido, no asiste razón al quejoso cuando afirma que las multas previstas en el artículo 39 reclamado son excesivas por impedir a la autoridad sancionadora individualizarlas de conformidad con los parámetros arriba indicados. Ello es así, pues como ya fue señalado, si una norma prevé una multa que oscila entre un mínimo y un máximo, ello impone a la autoridad administrativa la obligación implícita de individualizarla, proporcionalmente, como consecuencia directa del deber de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir en términos del artículo 16 de la Constitución Federal.
71. Por otra parte, las multas de referencia tampoco vulneran el principio de proporcionalidad de las sanciones a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal.
72. En efecto, este Alto Tribunal ha sido consistente en referir que si en las leyes se fija como límite inferior de una multa una cantidad o porcentaje superior a la mínima carga económica que podría imponerse a una persona, ello no se traduce en la previsión de una sanción pecuniaria de las proscritas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
73. Lo anterior, porque tal proceder constituye un ejercicio válido de la potestad legislativa, pues si las autoridades administrativas o

jurisdiccionales tienen arbitrio para individualizar una sanción, atendiendo a las circunstancias que rodean una conducta infractora, el legislador democrático puede considerar, por mayoría de razón, que el incumplimiento de una determinada obligación da lugar a imponer desde una sanción mínima a una de cuantía razonablemente elevada, máxime cuando corresponde al creador de la norma determinar, en principio, en qué medida una conducta infractora afecta al orden público y el interés social, así como el monto de la sanción pecuniaria suficiente para corregir su comisión.¹⁸

74. En este orden de ideas, si el legislador democrático consideró que la multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México para el sujeto obligado que, sin mediar resolución en sentido negativo, no publique o difunda la réplica solicitada dentro de los plazos establecidos por el artículo 14 del mismo ordenamiento en cuestión; así como para el sujeto obligado

¹⁸ En ese sentido, resulta ilustrativa la tesis 2a. CXLVIII/2001, emitida por la Segunda Sala y que esta Primera Sala comparte, de rubro y texto siguientes: **“MULTAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LEGISLADOR ESTABLEZCA COMO LÍMITE INFERIOR PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN UNA CUANTÍA SUPERIOR A LA MÍNIMA POSIBLE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.** El hecho de que en disposiciones de observancia general el legislador fije como límite inferior de una multa una cantidad o porcentaje superior a la mínima carga económica que podría imponerse a un gobernado, no conlleva el establecimiento de una sanción pecuniaria de las proscritas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino un ejercicio válido de la potestad legislativa, pues si las autoridades administrativas o jurisdiccionales pueden individualizar una sanción, atendiendo a las circunstancias que rodean una conducta infractora, por mayoría de razón, el legislador puede considerar que el incumplimiento de una determinada obligación o deber, con independencia de las referidas circunstancias, da lugar a la imposición desde una sanción mínima a una de cuantía razonablemente elevada, toda vez que es al propio creador de la norma al que corresponde, en principio, determinar en qué medida una conducta infractora afecta al orden público y al interés social, y cuál es el monto de la sanción pecuniaria suficiente para corregir su comisión. Amparo directo en revisión 406/2001. **Promotora Villavera, S.A. de C.V.** 15 de junio de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina”. Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, agosto de 2001, página 245 y registro 189041.

que se hubiese negado a la publicación o transmisión de la réplica sin que medie justificación de su decisión conforme al artículo 19 de la propia normativa reclamada; ello se hizo dentro del margen de libertad configurativa con el que cuenta para el diseño de las sanciones y la determinación del grado en que una determinada conducta afecta a la sociedad, máxime cuando está involucrado un derecho de rango constitucional, como lo es el de réplica reconocido en el artículo 6º de la Constitución Federal.

75. Por lo demás, resta decir que el planteamiento del quejoso en sentido de que el precepto reclamado vulnera el artículo 22 de la Constitución Federal porque le obliga a contar, por lo menos, con treinta y cinco mil cincuenta pesos para el caso de incurrir en la infracción respectiva, es inoperante al entrañar una cuestión hipotética y particular, como lo es la eventual comisión del supuesto de infracción respectivo, la imposición de la multa mínima respectiva y la solvencia que en un momento determinado pueda o no tener el quejoso.
76. En consecuencia, la pregunta que nos ocupa debe responderse en sentido negativo, estos es, las multas previstas en el artículo 39 reclamado no transgrede la prohibición de multas excesivas prevista en el artículo 22 de la Constitución Federal, ni tampoco resultan desproporcionales.
77. **Tercera cuestión: ¿Procede analizar la constitucionalidad de los artículos 38 y 40 del ordenamiento reclamado?**

78. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte, de oficio, que respecto de los artículos 38 y 40 del ordenamiento combatido se actualiza una diversa causa de improcedencia, no aducida por las partes ni analizada por el Juez de Distrito ni advertida por el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del recurso de revisión, que es la prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VIII del artículo 108, ambos preceptos de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no expresó algún concepto de violación en contra de dichos preceptos legales, a pesar de haberlos señalado como actos reclamados destacados.

79. En efecto, de la Ley Reglamentaria del juicio constitucional se sigue que la improcedencia de dicho medio de control opera cuando el promovente no expresa en la demanda conceptos de violación por los que estima que los artículos reclamados contravienen algún derecho humano, pues la consecuencia de no hacerlo así, conlleva la imposibilidad del órgano judicial de efectuar un análisis de constitucionalidad respecto de los actos reclamados, máxime que por virtud de los principios de instancia de parte agraviada y estricto derecho que rigen en la materia, ante la ausencia de argumentos que demuestren la violación de derechos humanos, el órgano de amparo se encuentra impedido para ejercer el control de constitucionalidad respectivo.

80. Luego, si el quejoso señaló con el carácter de normas generales reclamadas, en la página 1 de su demanda de amparo, los artículos 38

y 40 del ordenamiento en cuestión; pero no formuló algún concepto de violación en su contra, ni se advierte causa de pedir a través de la cual se argumente su inconstitucionalidad, es claro que procede sobreseer en el juicio respecto de dichos preceptos, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, y con la fracción VIII del diverso 108, todos de la Ley de Amparo.

81. Así las cosas, la pregunta que nos ocupa debe responderse en sentido negativo y procede sobreseer en el juicio respecto de los artículos 38 y 40 del ordenamiento reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.